

Desalojo Existencia De Menores

DOMINGO, 10 DE ENERO DE 2021

JURISPRUDENCIA

Desalojo. Existencia de menores En el marco de un juicio de desalojo, se revoca la resolución por la cual la juez ?a quo? dispuso que, por el momento, no correspondía la intervención de la Defensora de Menores y rechazó el pedido de suspensión del proceso, así como la designación de audiencia. Buenos Aires, 7 julio de 2016.- VISTOS Y CONSIDERANDO: I.- Vienen estos autos a conocimiento de la sala con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensora de menores contra la resolución de fs. 26/28, por la cual la juez ?a quo? dispuso que por el momento no correspondía su intervención y rechazó el pedido de suspensión del proceso, así como la designación de audiencia. El recurso fue mantenido con el dictamen de fs. 33/35, cuyo traslado no fue contestado por la actora. II.- En el marco de este juicio de desalojo, con posterioridad al traslado de la demanda y ante la existencia de menores de edad habitando el inmueble, se presentó la defensora de menores quien solicitó la suspensión del proceso, la fijación de una audiencia y la intervención del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Instituto de la Vivienda y Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Gobierno local (cf. dictamen de fs. 23/25). La juez de grado dispuso que al no ser parte los menores no cabía dar intervención al Ministerio apelante por el momento, aunque ordenó oficios a los organismos requeridos en resguardo de los niños involucrados a fin de poner en su conocimiento la existencia el proceso. III.- La resolución DGN N°1119/08 del 25/7/08 de la Defensoría General de la Nación, dispuso la necesaria intervención del Ministerio de la Defensa en los procesos de desalojo de inmuebles en los que habiten menores de edad, para tratar de evitar el desalojo y en su caso, procurar se provea una nueva vivienda antes de que se haga efectivo el lanzamiento, toda vez que al adoptarse esta medida se verán afectados tanto la persona como los bienes de los menores. Es decir, que la finalidad de dicha intervención es la de adoptar las medidas necesarias que tengan por objeto la protección integral de los derechos de las personas menores de edad reconocidos en el ordenamiento jurídico e incumbe al Ministerio de la Defensa la intervención en los procesos de desalojo a los fines de adoptar las medidas necesarias con relación a sus protegidos. Sin perjuicio de que en general los menores de edad no son parte en los contratos de locación de inmuebles, en el caso no se persigue el desalojo por alguna causal de incumplimiento contractual sino que la acción se ejerce contra intrusos y la demanda fue dirigida contra todos los ocupantes de la finca que compartirían con la actora, cuya ocupación ésta alegó ilegítima y que serían familiares de la pretendiente, quién en el acto de postulación denunció la existencia de los niños y solicitó audiencia, previa a la orden de desalojo, a fin de garantizar una solución habitacional al grupo familiar (cf. demanda de fs. 6/8). En el estado actual de la doctrina y de acuerdo con la normativa vigente, no es dudosa la representación amplia que en el ámbito judicial incumbe al Ministerio Público para peticionar e impulsar las medidas pertinentes en defensa de los intereses de los menores de edad involucrados, ya sea en defecto de la actividad de sus representantes legales o bien en conjunto con aquellos, vale decir como principal o complementaria según lo prevé asimismo en forma expresa el Código Civil y Comercial vigente en la actualidad (art. 103). De modo que no sería posible desconocer la facultad que poseería el defensor para contestar demandas e interponer inclusive las defensas a las que se crea con derecho en representación y beneficio de sus representados, idóneas para repeler la acción o acotar sus alcances. Si bien en el caso la suspensión y pedido de audiencia con la finalidad de garantizar a los menores el derecho a gozar de una vivienda digna guardaría relación más bien con la ejecución de una eventual condena favorable al derecho de la demandante y ese desenlace resultaría prematuro a esta altura del trámite; no puede soslayarse de todos modos que la propia actora solicitó audiencia a iguales fines en el punto II de fs. 29 no obstante el estado del trámite, y pese a la suspensión virtualmente operada con motivo de la decisión denegatoria del 26 de marzo del corriente año que viene apelada, no se llegaron a diligenciar los oficios ordenados a los organismos pertinentes (que sólo tenían por finalidad poner en conocimiento la promoción del presente); por lo que hubiera sido más apropiado a los intereses de toda las partes involucradas la admisión de lo solicitado en esa oportunidad. En cualquier caso, resulta atendible a esta altura que se disponga previo a todo trámite el diligenciamiento de los oficios requeridos a los organismos correspondientes del Gobierno local con la finalidad pedida por el Ministerio apelante y con su resultado, de acuerdo con la investigación que realicen de la situación en que se encuentra el grupo familiar demandado, la juez de grado evalúe la posibilidad y utilidad de la audiencia que la defensora de menores y la parte actora solicitaron oportunamente en la instancia de grado; debiendo asimismo priorizar el interés familiar de acuerdo con el parentesco que vincularía a las partes. Por lo expuesto y de conformidad en lo pertinente con el dictamen de la representante del Ministerio Pupilar, el Tribunal RESUELVE: Revocar con los alcances expuestos en los considerandos, la resolución de fs. 26/28; debiendo en la instancia de grado proveerse los oficios solicitados en el dictamen de fs. 23/25 y con su resultado, evaluar la posibilidad y utilidad de la audiencia que la defensora de menores y la parte actora peticionaron

oportunamente. Sin costas dealzada en razón de la naturaleza de la intervención del Ministerio apelante. Regístrese, notifíquese a la defensora de menores de Cámara en su despacho y a las partes presentadas en autos por secretaría en sus respectivos domicilios electrónicos (Ley 26.685 y acordadas 31/11 y 38/13 CSJN). Fecho, cúmplase con la Acordada 24/13 de la Corte Suprema y devuélvase. La vocalía n° 20 no interviene por hallarse vacante (art. 109 RJN).- CARLOS ALFREDO BELLUCCI

CARLOS A. CARRANZA CASARES

010616E